

Bruselas pide a España revertir el cierre de Almaraz para evitar tensiones del sistema eléctrico

Europa reclama una evaluación de impacto completa y señala posibles efectos negativos sobre la economía y el empleo locales

CRISTINA CÁNDIDO
Madrid

El futuro de la central nuclear de Almaraz ha dado el salto a Bruselas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un informe en el que reclama al Gobierno español que revise su decisión de cerrar la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y que cualquier resolución al respecto venga respaldada por una evaluación de impacto «rigurosa» que contemple las consecuencias económicas, sociales y energéticas del desmantelamiento.

Este documento es fruto de la visita que ocho eurodiputados realizaron en febrero a la instalación extremeña a instancias de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro'. Sobre el terreno, los representantes europeos tomaron el pulso a la comarca de Campo Arañuelo que orbita en torno a la planta, su principal motor económico. El informe subraya el peso de Almaraz en el mix eléctrico español y lanza una advertencia: su cierre podría tensionar tanto la estabilidad del sistema energético como el empleo y el tejido productivo local.

En ese pulso entre seguridad energética, transición ecológica y coste para el consumidor, Almaraz vuelve a situarse en el centro de una decisión que trasciende lo técnico y se adentra de lleno en el terreno político. Bruselas enmarca además el debate en clave comunitaria. Los eurodiputados recuerdan que los



Vista de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. EFE

objetivos de descarbonización de la Unión Europea no deberían chocar con la seguridad de suministro en el contexto geopolítico actual de las guerras en Oriente Medio y Ucrania. Dos vectores que, a su juicio, deben avanzar en paralelo y no como fuerzas opuestas.

Debate abierto

La aprobación del texto ha sido interpretada como un espaldarazo

por quienes defienden la continuidad de la planta. «Es un respaldo incontestable», sostiene el presi-

PwC estima un impacto de 4.500 millones si la planta para y los ecologistas alertan de un sobrecoste de 3.800 millones por tenerla activa

dente de la plataforma promotora de la visita, Fernando Sánchez, que advierte de que «España no puede ser un verso suelto dentro de Europa». El calendario actual fija el cierre del primer reactor en 2027 y del segundo en 2028, aunque el proceso sigue pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. Ese informe será clave para que el Ejecutivo decida sobre la prórroga solicitada por Iberdrola, En-

desa y Naturgy, que buscan mantener operativo el reactor I hasta 2030. Pero el aval europeo no ha cerrado el debate, ni mucho menos. Más de medio centenar de organizaciones agrupadas bajo el manifiesto '¿Alargar las nucleares? No, gracias' también están presionando en sentido contrario y exigen al Gobierno que cumpla el calendario pactado. En concreto, defienden que prolongar la vida de Almaraz implicaría un sobrecoste superior a los 3.800 millones de euros que, sostienen, acabaría trasladándose a la factura de consumidores.

Impacto

No obstante, en sentido contrario, un informe de la consultora PwC estima que la ausencia de los dos reactores de la planta extremeña habría tenido un impacto relevante sobre los costes del sistema económico español. En concreto, calcula que el tejido industrial habría afrontado un incremento de 4.541 millones de euros en 2025, al que se sumarían otros 4.246 millones en el caso de los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas.

Las voces críticas denuncian la «presión» de las eléctricas para estirar la actividad de la central más allá de lo acordado y cuestionan otro de los argumentos centrales del sector nuclear: su papel como garantía de estabilidad del sistema. Señalan al gran apagón de 2025 como ejemplo de sus limitaciones, al asegurar que las centrales atómicas fueron las últimas en recuperar producción tras el incidente. Y añaden otro dato al debate: en el último año se habrían desaprovechado cerca de 30 millones de megavatios hora de energía renovable, en parte –afirman– por la prioridad de despacho de la nuclear en la red.

La red eléctrica arrastra una década de retraso en infraestructuras clave para conectar nueva demanda

Aelec denuncia que el 63% de las subestaciones críticas y más de 400 puntos pendientes de planes anteriores están sin ejecutar

C. CÁNDIDO
Madrid

La patronal eléctrica Aelec ha cuantificado por primera vez el alcance del atasco en la red de transporte: más de la mitad de las infraestructuras necesarias para conectar nueva demanda acumulan años de retraso, en muchos

casos superiores a una década. El origen, según la organización que representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, no son los obstáculos administrativos ni las trabas medioambientales, sino la falta sistemática de ejecución de la planificación.

El diagnóstico procede de un informe encargado a PwC que ha analizado el grado de implementación de diversas tipologías de activos eléctricos desde el periodo 2008-2016 hasta el borrador para 2025-2030. De las 254 subestaciones que se consideran críticas para el sistema, 161 (el 63%) registran una demora media de 7 años. La mitad acumula al menos cinco años de retraso y 49 superan la

década. Y no se trata de casos aislados, ya que este patrón atraviesa toda la red de transporte.

El problema se extiende también a los puntos de conexión que permiten enganchar a la red tanto la nueva demanda como la generación renovable. De las 659 posiciones contempladas en el borrador para integrar 27,7 GW de nueva capacidad, 402 (más del 60%) no son nuevas: ya figuraban en planificaciones anteriores y no se ejecutaron. Su retraso medio es de casi 6 años y en 63 casos supera la década.

Esta situación no incumbe solo al operador del sistema pero las empresas distribuidoras apuntan a Red Eléctrica, sin citarla expresamente, como

responsable. La razón está en que este tipo de planificaciones son vinculantes a la tarea de las eléctricas pero no lo son para el gestor por lo que, en muchos casos, las empresas no pueden actuar hasta que la red de transporte está desarrollada.

Retraso en la transición

Este desfase acumulado tiene una lectura directa sobre la transición energética. PwC estima que el bloqueo equivale a entre seis y siete años de retraso en la integración de demanda eléctrica. Un retroceso que ya se traduce en consecuencias tangibles, con proyectos industriales paralizados, centros de datos sin acceso a la

red, corredores ferroviarios de alta velocidad comprometidos y puertos comerciales que no pueden avanzar su electrificación.

La dimensión financiera añade otra capa de complejidad. El borrador 2025-2030 reserva 1.342 millones de euros –el 10% de toda la inversión nacional en red– para posiciones y líneas con afección a la distribución y la nueva demanda. Sin embargo, el 43% de ese presupuesto no responde a necesidades nuevas, sino a actuaciones que no se completaron en las planificaciones anteriores. Es decir, que en la práctica, casi la mitad del esfuerzo inversor previsto sirve para cubrir el pasivo acumulado, no para abrir capacidad adicional.

Esta situación, según explicó Aelec en la presentación, supone una pérdida de competitividad y autonomía derivada del colapso de la red que impide electrificar sectores clave de la economía como la industria.